

# PACIFICANDO EL BARRIO: ORDEN SOCIAL, MICROTRÁFICO Y TERCERIZACIÓN DE LA VIOLENCIA EN UN BARRIO DEL DISTRITO DE AGUABLANCA (CALI, COLOMBIA)\*

Vinasco-Martínez, D. (2019). Pacificando el barrio: orden social, microtráfico y tercerización de la violencia en un barrio del distrito de Aguablanca (Cali, Colombia). *Revista Cultura y Droga*, 24 (27), 157-187. DOI: 10.17151/culdr.2019.24.27.8.

DIANA VINASCO-MARTÍNEZ\*

Recibido: 26 de julio de 2018  
Aprobado: 6 de octubre de 2018


## RESUMEN

El artículo analiza la forma de reconfiguración del orden social en un barrio del Distrito de Aguablanca en Cali, a partir de los cambios y reacomodamientos regionales y nacionales del negocio del narcotráfico. Con base en un trabajo etnográfico, se indaga la incidencia del microtráfico en el sector analizado, cómo ha transformado a las pandillas, disminuido la agencia de sus habitantes e introducido nuevas formas de violencia como la contratación de jóvenes por bandas criminales externas al barrio y la adopción de nuevos repertorios de violencia no cuantificables, que suponen una ‘pacificación’ del barrio debido a la disminución de las cifras de homicidios. Se argumenta que los escenarios más vulnerables a estas dinámicas son sectores con mayores desventajas socioeconómicas, pues los discursos que asocian clase, raza y espacio urbano como factores productores de violencia, crean geografías racializadas que se convierten en escenarios propicios para reclutamiento de jóvenes por bandas criminales.

**Palabras clave:** violencia urbana, microtráfico, orden social, desigualdad social.

---

\* Este artículo forma parte de la investigación sobre Orden social, microtráfico y outsourcing criminal en Cali, realizada para obtener el título de Magister en Estudios sociales y políticos de la Universidad Icesi.

\*\* Magister en Estudios sociales y políticos. Universidad Icesi (Cali-Colombia). E-mail: dyvinasco@icesi.edu.co  
 [orcid.org/0000-0002-0580-1160](https://orcid.org/0000-0002-0580-1160). **Google Scholar**



## **PACIFYING THE NEIGHBORHOOD: SOCIAL ORDER, DRUG MICRO-TRAFFICKING AN OUTSOURCING OF VIOLENCE IN A NEIGHBORHOOD OF THE AGUABLANCA DISTRICT (CALI, COLOMBIA)**

### **ABSTRACT**

This article analyzes the form of reconfiguration of social order in a neighborhood of the Aguablanca District in Cali, based on changes and regional and national rearrangements of the drug trafficking business. From ethnographic work, the incidence of micro-trafficking in the analyzed sector is analyzed, as well as how it has transformed gangs, diminished the agency of its inhabitants, and introduced new forms of violence such as the hiring of young people by criminal gangs outside the community, and the adoption of new non-quantifiable violence repertoires which represent a ‘pacification’ of the neighborhood due to the decrease in homicide figures. It is argued that the most vulnerable scenarios to these dynamics are the sectors with greatest socioeconomic disadvantages because the discourses that associate class, race and urban space as factors create racialized geographies that become favorable scenarios for the recruitment of young people by criminal gangs.

**Key words:** urban violence, drug micro-trafficking, social order, social inequality.

### **INTRODUCCIÓN**

El escenario de postconflicto en Colombia, luego de la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las Farc en 2016, generó un amplio debate sobre las temáticas que debían incluirse en la agenda pública para la construcción de paz; una de ellas ha sido el papel de las ciudades en este proceso, teniendo en cuenta que en los escenarios urbanos se están desarrollando nuevas formas de criminalidad y violencia y que la urbanización del país ha estado acompañada, por diversos motivos, de una urbanización del conflicto armado en las últimas décadas. Por ello, desde las ciencias sociales se han realizado llamados a incluir las problemáticas de la violencia urbana entre los retos que debe enfrentar el país en el postconflicto (Ávila, 2016; Pégolis y Ramírez, 2015; Patiño, 2013).

Sin embargo, el interés por el estudio de la violencia en las ciudades colombianas no se limita a los años recientes ni a su relación con el acuerdo de paz firmado en 2016. Desde finales de los años ochenta, autores como Camacho y Guzmán para el caso de Cali (1988; 1990; 1993), centraron sus análisis en la relación entre narcotráfico y violencia urbana, debido a la fuerza que empezó a cobrar el narcotráfico en el país en ese momento, con gran notoriedad en esta ciudad y en Medellín, y que continúa vigente ante la evidente relación entre narcotráfico, estructuras criminales y delincuencia común.

Tal como señala Salazar (2015), no se puede entender la situación actual de Cali sin tener en cuenta cómo ha evolucionado durante varias décadas la interacción entre los negocios ilegales, la violencia y el poder político, que ha generado una violencia estable, reguladora de un orden social en el que se combinan prácticas legales e ilegales, lo que explica la permanencia de la violencia y la imposibilidad de construir un proyecto incluyente de ciudad.

Estos fenómenos no golpean de igual forma a todos los sectores de la ciudad, pues la violencia asociada al narcotráfico y el sobresaliente aumento de las dinámicas del microtráfico<sup>1</sup>, se concentra más en ciertos barrios y zonas de la ciudad, reconfigurando relaciones sociales entre diferentes actores locales, estatales y armados ilegales.

Tal es el caso de zonas como el Distrito de Aguablanca, que puede caracterizarse por su alta concentración de desventajas socioeconómicas y trabajo informal. También concentra el mayor porcentaje de afrodescendientes de la ciudad, debido a las olas de desplazamiento provenientes del Pacífico colombiano, como consecuencia del conflicto armado. Los altos índices de violencia presentes en esta zona de la ciudad, unidos a la concentración de la pobreza y el alto componente étnico afrodescendiente, han terminado por reproducir un discurso que asocia clase, raza y espacio urbano como productores de dinámicas de violencia en la ciudad.

Es pues necesario reconocer la multiplicidad de actores y procesos que dan pie a la reproducción de la violencia y que interactúan, implícita o explícitamente, para su

---

<sup>1</sup> El microtráfico es entendido como uno de los fenómenos insertos dentro del narcotráfico. El Observatorio de Drogas de Colombia describe el narcotráfico como un sistema que incluye, a su vez, cuatro subsistemas: producción, distribución, comercialización y capital circulante. El microtráfico se ubica en la fase de distribución de las sustancias psicoactivas, pero se orienta exclusivamente al mercado nacional y tiene su fase final en el narcomenudeo, que se refiere al abastecimiento de los expendedores locales y la venta del producto al consumidor (ODC, 2016).

mantenimiento. Los habitantes de estos sectores, sin embargo, no deben ser vistos de manera dicotómica: únicamente como actores pasivos (solo víctimas), o únicamente como auspiciadores de la violencia y el delito (actores armados o cómplices); pues las realidades de la violencia en las localidades pueden llegar a ser mucho más complejas y pasan por la multiplicidad de interacciones, tensiones y prácticas que se establecen en un espacio.

Como forma de visibilizar estas interacciones en la violencia en Cali, desde lo local, este artículo se centra en la reconfiguración de los órdenes sociales que establece la violencia asociada al microtráfico, a partir del trabajo etnográfico realizado en un barrio ubicado en el Distrito de Aguablanca, oriente de la ciudad, que aquí será denominado El Barrio<sup>2</sup>. Con ello se busca aportar una visión local sobre la relación entre actores locales, Estado y actores externos, más allá de las cifras que muestran un espacio violento que invisibiliza las estrategias de sus habitantes para lidiar con la violencia. También se pretende demostrar la influencia de los actores externos en el mantenimiento y reconfiguración de la violencia y el poder que adquieren para controlar a los actores armados internos y al resto de la población, evidenciando la reproducción de las dinámicas regionales y nacionales en la violencia local, y el papel que juegan las desigualdades sociales de la ciudad en el mantenimiento de espacios violentos y marginados. Dicha perspectiva permite argumentar que, a pesar del poder intimidante que significa el uso de la violencia armada de ciertos grupos, sus formas de actuación también se reconfiguran a partir de las dinámicas propias del lugar en el que se imponen, conformando diversos tipos de orden social.

Esto implica que la coexistencia de actores armados y la comunidad, no sea vista aquí como una simple relación dicotómica (legal-ilegal, amigo-enemigo, víctima-victimario), por el contrario, ésta implica tensiones, interacciones y constantes transformaciones. Relaciones que se hacen más evidentes en sectores marginados donde las desventajas socioeconómicas, terminan siendo un escenario propicio para el ejercicio de diversas formas de violencia que impactan de diferentes formas y en grados variables a sus habitantes. Esto se hará evidente a través del rastreo de nuevas formas de ejercer la violencia como el *outsourcing criminal*<sup>3</sup> y las estrategias para controlar los negocios ilegales –como la ‘pacificación’ de los barrios a través de

---

<sup>2</sup> Los nombres de los entrevistados también han sido cambiados, para evitar cualquier inconveniente de seguridad.

<sup>3</sup> El *outsourcing criminal* se puede definir como la contratación de jóvenes que demuestran mayores capacidades para delinquir, a bandas criminales asociadas al microtráfico, para actividades de sicariato, extorsión, microtráfico, etc. Para ampliar este tema ver: (Valencia, 2015) (Valencia y Vinasco, *forthcoming*).

nuevos repertorios de violencia menos visibles para las autoridades; y la construcción de geografías racializadas (Alves, 2017), que crea discursos de focalización de la violencia en ciertas zonas, como estrategia para imponer políticas de represión sobre poblaciones vulnerables y mostrar éxito en las políticas de seguridad.

Para ello, esta investigación se sustenta en un trabajo que combina a) la exploración de las trayectorias de vida de algunos habitantes de El Barrio, a partir de un trabajo de campo etnográfico<sup>4</sup>, b) un análisis del fenómeno del narcotráfico, la violencia y la desigualdad en Cali y el Distrito de Aguablanca desde una perspectiva histórica y, c) el análisis de las cifras de homicidios en la ciudad, el Distrito de Aguablanca y El Barrio, tomando como base los datos del Observatorio Social de Cali en sus informes anuales 2005-2017. A través de ello, se busca entender cómo este sector y sus habitantes han sido impactados por la violencia, cómo la interpretan, confrontan y negocian con ella.

### **Orden social y violencia en contextos locales**

Para analizar los matices que adquiere la incursión y presencia de actores armados en un determinado espacio, resulta pertinente, más que analizar la forma como éstos controlan el espacio, plantear los tipos de relaciones que se establecen entre quienes habitan un espacio con alta presencia de actores armados y violencia. Para ello, el presente análisis se sustenta en la noción de orden social, que es definida por Lilian Bobea como el “conjunto de normas implícitas y explícitas que regulan la interacción entre individuos en una comunidad o localidad dada, a partir de normas preestablecidas y compartidas por la colectividad” (2017, p. 78). Es decir que los tipos de relación entre diversos actores van configurando formas de habitar el territorio, negociar con la violencia y tramitar el peligro; no en términos de una negación de la violencia y la victimización a la que están sometidos los habitantes de un lugar, sino en términos de las estrategias que cada sujeto adopta para permanecer en una zona marcada por la violencia. La forma en que el orden social se configura en un determinado espacio depende de los actores que lo habiten, así como de sus prácticas cotidianas y del poder que ejerzan sobre él. Hace referencia a los patrones de organización social y cómo se desarrolla la vida social y política en un determinado espacio, en la cual se conjugan distintos tipos de orden que pretenden ser impuestos: el estatal, el de los grupos armados y el de la vida cotidiana de los habitantes de una localidad.

---

<sup>4</sup>Las entrevistas fueron realizadas entre abril de 2017 y enero de 2018.

Por otro lado, el trabajo realizado por García et al. (2011, 2014a, 2014b), sobre ordenes locales en contextos de violencia en nueve municipios de Colombia, se sustenta en una idea de orden social que refiere a patrones y acuerdos intersubjetivos que regulan la interacción entre quienes componen una sociedad, cualquiera sea su escala socio-espacial. Dichos acuerdos permiten orientar las cotidianidades de los actores, en cuanto a sus relaciones sociales, políticas, económicas y simbólicas. Además, el orden social no significa una ausencia o eliminación de la violencia, pues en zonas de conflicto armado, orden y violencia no pueden ser vistos como opuestos, sino que la violencia puede ser un factor determinante y co-presente en el mantenimiento del orden social (García et al., 2014a). Romper la dicotomía entre orden y violencia, plantea una mirada amplia sobre la forma en que han sido constituidas las relaciones sociales, políticas y económicas, en contextos atravesados por el conflicto (García, 2011, p. 57).

Sin embargo, los estudios que han indagado por el orden social en contextos de violencia en Colombia han puesto un mayor énfasis en el orden impuesto por los actores armados y el apoyo o la resistencia a éstos, con lo cual se ha dado poca atención a las interacciones que surgen entre actores armados y no armados. Por ello, para comprender cómo se estructura el orden social, es necesario ir más allá del análisis de cómo una población colabora, obedece o se somete a un grupo que predomina a través de la violencia; es necesario analizar las resistencias, disputas y negociaciones y cómo aportan éstas a la estructuración del orden social (García, 2011, pp. 72-73).

Asimismo, se debe tener en cuenta que los análisis macro no permiten evidenciar la forma en que operan estas interacciones entre actores armados y no armados. Sería entonces, como señala Arjona (2016), en lo local –en las zonas rurales, el pueblo y en las ciudades, el barrio– donde se podrían rastrear las diversas dimensiones implicadas en la construcción de las relaciones sociales. Dicha escala de análisis permite determinar las variaciones del orden social, teniendo en cuenta que los grupos armados pueden variar sus estrategias de una comunidad a otra dependiendo de la forma en que éstas reaccionan a sus actuaciones. La localidad es entonces, para la misma autora, la unidad ideal para analizar las formas que adquiere el orden social en la violencia, pues una unidad geográfica mayor pasaría por alto las variaciones que el orden social puede adquirir dentro de una ciudad o localidad:

En cuanto a la interacción entre grupos armados y comunidades, es importante resaltar que, si bien la guerra siempre trae consigo victimización en las zonas donde los grupos están presentes, tal fenómeno tiene lugar no solo en distintas

proporciones sino también en diferentes contextos y procesos de transformación de la vida local. Para entender los efectos del conflicto sobre las poblaciones que lo viven cotidianamente es necesario explorar las diversas maneras como la presencia de los grupos armados transforma la vida local. Para hacerlo, es fundamental preguntarnos por las alternativas de la población civil. (Arjona, 2008, p.161).

Dichas alternativas no se refieren a formas directas o explícitas de oponerse o enfrentar a los grupos armados, por el contrario, se relacionan con las prácticas cotidianas que cada habitante realiza para asumir los peligros presentes en su entorno. Asimismo, refiere a la forma en que éstos perciben la violencia, la vida cotidiana y las relaciones sociales.

Sin embargo, los análisis basados en la categoría de orden social en relación con el conflicto armado y la violencia en Colombia se han centrado principalmente en zonas rurales y municipios pequeños. Este énfasis tiene que ver con que el escenario de mayor confrontación de los grupos armados fue el campo y, a su vez, la mayoría de actos violentos fueron cometidos en contra de las comunidades rurales (masacres, desplazamientos, violaciones a los derechos humanos). Ello no significa que las ciudades no hayan sufrido las consecuencias del conflicto, sino que la crudeza del conflicto armado en el campo relativizó los análisis sobre la violencia urbana y sobre las conexiones campo-ciudad del conflicto.

Lo que se propone, entonces, es un análisis de la violencia urbana y el microtráfico en Cali desde la perspectiva del orden social y a escala local, a partir de la descripción de cómo los actores asumen su vida cotidiana con relación a las prácticas de violencia presentes en un barrio de Cali con altas cifras de violencia. Con ello se busca indagar cómo los actores locales las enfrentan, las interpretan, se relacionan con ellas o las ignoran. Esto supone reconocer que la violencia puede ser percibida y asumida de diversas maneras en una misma localidad e implica analizarla como una estructura interrelacionada, en la cual sus formas, propósitos, actores y consecuencias, varían de acuerdo con las dinámicas locales, nacionales y globales. Dichas dinámicas pueden ser las políticas antidrogas del país y de la región, los intereses y negocios de los carteles del narcotráfico o las agendas políticas de los gobernantes. De esta manera no solo los actores externos deben ser tenidos en cuenta, ya que a pesar del poder intimidante que significa el uso de la violencia armada de los grupos que ejercen el microtráfico, los habitantes de un sector también pueden crear estrategias y dinámicas que les permitan seguir ocupando y movilizándose estratégicamente en un espacio, dinámicas que, incluso, pueden terminar reproduciendo o legitimando la violencia.

## **Cali: migración, desigualdad social y narcotráfico**

Los cambios ocurridos en las estructuras regionales e internacionales del narcotráfico, han terminado por afectar las localidades, debido a las nuevas dinámicas de comercialización dentro de los barrios, así como a la imposición de prácticas de violencia, intimidación y miedo. Pues, aunque los grupos asociados al negocio de la droga han variado en su estructura y actuación, desde los grandes carteles de la droga surgidos en la década de los años ochenta hasta las bandas de microtráfico en la actualidad, el papel que continúan ejerciendo en la explicación sobre la permanencia y los altos índices de violencia en la ciudad es innegable.

La ciudad de Cali, capital del Valle del Cauca, se encuentra ubicada en el suroccidente del país, como punto intermedio y de conexión entre el centro del país, la región costera del Pacífico colombiano y los departamentos vecinos de Cauca y Chocó. Su ubicación geográfica la convierte en paso obligado para el tránsito de exportaciones e importaciones por su cercanía al municipio de Buenaventura, principal puerto sobre el Pacífico. Como capital del Valle del Cauca, Cali ha sido protagonista del desarrollo de la economía regional, convirtiéndose en el centro económico, político y cultural de la región y en la tercera ciudad más importante del país. Es además uno de los centros urbanos más poblados del país al contar en la actualidad con más de dos millones de habitantes, cifra superada sólo por Bogotá y Medellín.

Las características geográficas, económicas y urbanas de la ciudad también han convertido a Cali en atractiva para el asentamiento de actividades criminales; proceso impulsado, a su vez, por el surgimiento del Cartel de Cali. La ciudad conecta a los municipios del norte del Valle del Cauca, con alta incidencia del narcotráfico, con municipios como Buenaventura y Tumaco, principales rutas de salida de la droga del país y con el Cauca como uno de los principales productores de droga. Esto ha convertido a Cali en un escenario de articulación de las dinámicas locales e internacionales de la criminalidad (Ortega, 2014: 89). Además, Cali ha sido receptora de grandes olas de desplazamiento, causadas por el conflicto armado, provenientes principalmente de la Costa Pacífica colombiana, de departamentos como Chocó, Cauca, Nariño, y desde municipios del Valle del Cauca. Las dinámicas del conflicto armado en estos territorios han sido la principal causa de expulsión del campo hacia la ciudad.

Al largo conflicto armado que vivió el país durante gran parte del siglo XX, se sumaron en las últimas décadas las disputas por el control de los territorios entre grupos



guerrilleros, paramilitares y estatales, propiciada por el negocio del narcotráfico. La importancia de la Costa Pacífica como corredor estratégico para el comercio internacional de la droga, ha dejado a los habitantes de estas zonas, en su gran mayoría afrodescendientes, en medio de la violencia y el abandono estatal, encontrando como única alternativa, el abandono de sus territorios y la llegada a la ciudad.

La migración es uno de los fenómenos que más caracterizó el desarrollo urbano de Cali en el siglo XX y que, aún en la actualidad, continúa definiendo muchas de sus políticas en diversos aspectos. Uno de los problemas más evidentes de la ciudad ha sido el déficit de vivienda, que ha repercutido en un continuo y acelerado crecimiento de los denominados “asentamientos subnormales”, barrios informales en los que se han asentado las familias más empobrecidas, y la mayoría de las desplazadas.

La gran cantidad de barrios que a lo largo del siglo XX surgieron de manera informal y posteriormente fueron legalizados, mediante largos procesos de negociación con el Estado y a través de la organización y luchas de sus habitantes, llevaron a Cali a ser reconocida como “la ciudad de las invasiones” (Mosquera, 1984, pp. 9-10). Además de sus precarias condiciones socio- económicas, dichos barrios, ubicados principalmente en la zona oriental de la ciudad y en las laderas, han concentrado gran parte de las problemáticas de violencia e ilegalidad que atraviesa la ciudad, creando, a su vez, un estigma e imaginario que asocia pobreza y violencia de manera causal. Desconociendo que los conflictos que atraviesan estas zonas son un reflejo de las problemáticas que enfrenta la ciudad en su conjunto.

Uno de los lugares con mayor concentración de desplazados y que refleja de manera más clara las desigualdades sociales de la ciudad es, como ya se ha señalado, la zona oriental de la ciudad conocida como Distrito de Aguablanca. Teniendo en cuenta que Cali no se encuentra dividida en distritos, sino en comunas y barrios<sup>5</sup>, es necesario aclarar que el Distrito de Aguablanca corresponde a una construcción sociohistórica y no formal, que se ha quedado en el imaginario de los habitantes de Cali como un sector deprimido y peligroso, debido a las altas cifras de pobreza y violencia que presenta. Asimismo, la alta presencia de afrodescendientes que habitan este sector ha servido para crear un discurso que asocia raza y pobreza como factores explicativos de la violencia en la ciudad; estigmatizando a sus habitantes y aumentando sus

---

<sup>5</sup> Cali se encuentra dividida en 21 comunas, que agrupan barrios con condiciones sociodemográficas, físicas y urbanísticas similares. Forma de división establecida mediante el Acuerdo N°15 de 1988.

condiciones de desigualdad social y falta de oportunidades. Las comunas 13, 14, 15, 16 y 21, que concentran aproximadamente el 70% de la población afrodescendiente de la ciudad, también concentran las tasas más altas de trabajo informal y el mayor número de homicidios (mapa 1).

El espacio donde se asientan hoy estas comunas fue conocido hasta la década de 1970 como el distrito de riego de Aguablanca, extensa zona que se encontraba por fuera del perímetro urbano de la ciudad, donde se ubicaban varias haciendas agrícolas y, además, era la zona de inundación del río Cauca. Aunque en principio la zona fue desecada con el fin de destinarla a la agricultura, la demanda de vivienda que atravesaba la ciudad, además de diversos intereses de sectores políticos y económicos, cambiaron su uso de agrícola a urbanizable, a pesar de ser un terreno no apto para vivienda

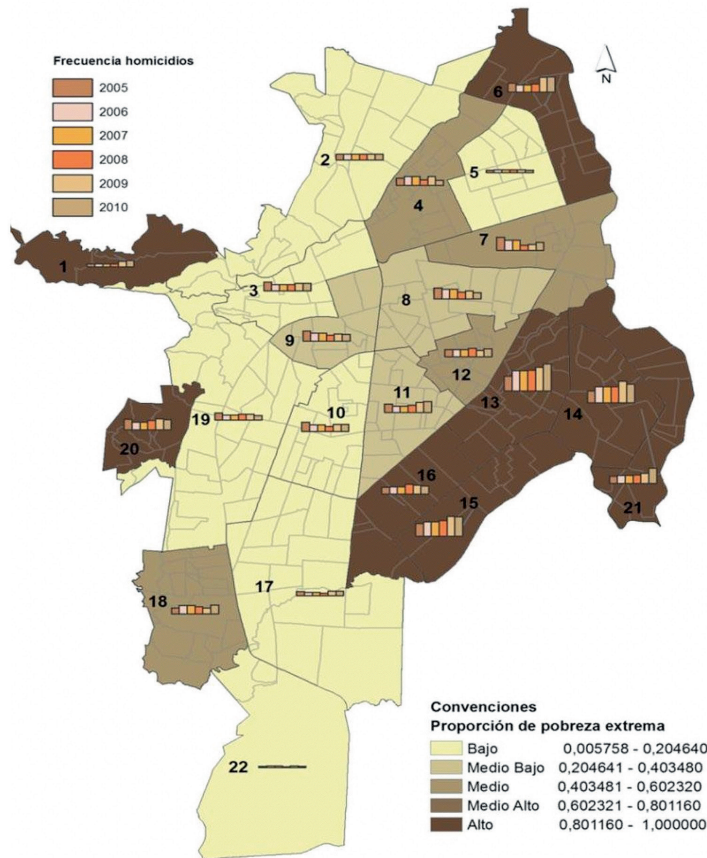
Su poblamiento se inició a finales de los setenta mediante diversas modalidades como ocupación popular de terrenos, urbanizadores clandestinos y algunos proyectos estatales que entregaban lotes con servicios. Como señala González “en términos generales la población organizada diseñó y construyó el equipamiento urbano y las redes de servicios públicos y, posteriormente, llegó el Estado a rectificar o consolidar dichas estructuras.” (González, 2012, p. 19). Cabe aclarar que independiente de la modalidad de ocupación, la administración municipal, al regularizar los barrios, cobró a todas las familias un valor por el lote que ocupaban.

En este mismo periodo, en los años ochenta, se configuró el Cartel de Cali como organización narcotraficante y criminal en los años ochenta y se consolidó cuando conformó un aparato coercitivo que permitió articular narcotraficantes, estructuras delincuenciales y criminales bajo su dominio (Escobedo, 2013). La desarticulación del Cartel de Cali hacia finales de los años noventa, a raíz de las capturas o entregas de sus jefes principales, fue uno de los grandes logros del gobierno nacional. Además del golpe que significaba para la estructura de la droga a nivel mundial, suponía el fin de una época de violencia, ilegalidad y cultura del crimen que había permeado a una buena parte de la sociedad caleña.

Sin embargo, su fin no significó una reducción de la violencia, sino una reconfiguración de los grupos narcotraficantes, ya que, para comienzos de la década del 2000, se posicionó con fuerza el Cartel del Norte del Valle, que logró mantener su unidad, y se forjó en el marco de enfrentamientos con los remanentes del Cartel de Cali y en

particular con el llamado Clan de los Herrera. Para mediados de la década del 2000, estos grupos comenzaron a atomizarse y transformarse en grupos más pequeños que ampliaron sus estrategias de comercialización de la droga a través del microtráfico en los barrios de la ciudad y de la agencia de las oficinas de cobro<sup>6</sup>, que se utilizaron para zanjar disputas entre sus facciones internas.

**Mapa 1.** Relación entre número de homicidios e índice de pobreza extrema en comunas de Cali (2005-2010).



Fuente: (Alves, Moreno y Ramos; 2014).

<sup>6</sup>Las oficinas de cobro han sido definidas como una red de relaciones o estructuras que coordinan sicarios al servicio de narcotraficantes para hacer cobros, proteger su seguridad, neutralizar la competencia y en general, garantizar las condiciones del negocio con una remuneración económica

A esta nueva dinámica de medianos carteles se sumó el reacomodamiento de bandas criminales después de la desmovilización de grupos paramilitares en 2005. Los herederos de estas estructuras paramilitares, denominados bandas criminales (bacrim) se dedicaron a controlar el expendio de drogas para el mercado local (combinado con prácticas extorsivas, sicariato, oficinas de cobro), incursionando con mayor fuerza en las áreas urbanas (Ordóñez, 2017; Pérez y Montoya, 2013). Arévalo y Guáqueta (2014) afirman que las bacrim que operan en el Valle del Cauca, conformadas por paramilitares que no se desmovilizaron o que lo hicieron, pero retornaron a la ilegalidad, han tenido a Cali como epicentro de sus acciones, debido a su ubicación estratégica.

Resulta importante resaltar que el impacto del narcotráfico no operó únicamente a través de las llamadas oficinas de cobro, las bandas delincuenciales y las organizaciones de limpieza, que elevaron los niveles de homicidios. En Cali, las pandillas no se pueden concebir por fuera del espectro criminal determinado por el narcotráfico, pues son las que aportan parte de los sicarios que le hacen trabajos al narcotráfico y a las estructuras criminales. Son la cantera de la que las oficinas de cobro echan mano para reproducirse, renovarse y persistir, más aún en coyunturas en que son golpeadas, bien sea por el accionar legítimo de las autoridades, o en el marco de disputas entre los mismos criminales (Escobedo, 2013). Lo anterior permite reiterar la importancia de explorar las transformaciones y dinámicas de la violencia, ahora asociada al microtráfico, en los sectores periféricos de la ciudad que presentan los índices más altos de violencia y homicidios.

Como ya se ha señalado, los barrios que conforman el denominado Distrito de Aguablanca se han hecho tristemente célebres debido a las altas cifras de violencia que allí se concentran. Sin embargo, la violencia y la delincuencia no son fenómenos exclusivos del oriente de la ciudad, y las cifras de violencia que aporta este sector, no explican por sí solas que Cali se encuentre entre las ciudades más violentas del país. A pesar de ello, como lo demuestran varios trabajos (Escobedo, 2013; Arévalo y Guáqueta, 2014), las expresiones de la violencia en la ciudad sí se han focalizado y han mantenido sus niveles más altos al oriente de la ciudad, en las comunas 13, 14, 15 y 21.

Además de la estigmatización del Distrito de Aguablanca, los fenómenos allí presentes han sido vistos de manera dicotómica, planteando la violencia como ejercida por unos actores armados sobre otros no armados e indefensos, y de la cual el resto de

la ciudad no participa. Esta postura ha prevalecido en las interpretaciones sobre la violencia en Latinoamérica, en donde muchas veces “las ciudades aparecen en los discursos académicos y mediáticos como espacios de miedo y delincuencia, donde la llamada sociedad civil es concebida como un grupo homogéneo, amenazada por aquellos vistos como potenciales criminales. (Alves et al., 2014, p. 4).

Intentando sobre pasar esta dicotomía, algunas investigaciones han avanzado en el reconocimiento de zonas grises, planteando que entre la legalidad y la ilegalidad no existe una línea divisoria sino diversos puntos de contacto entre lo establecido y lo sancionado, tanto formal como socialmente (Marulanda, 2013; Perea y Jaramillo, 2014). A escala local, en El Barrio es posible observar estas zonas grises y puntos intermedios de negociación, a través de las narraciones de algunos de sus habitantes, que dan cuenta de la forma en que logran tramitar la violencia y negociar con ella, a partir de las estrategias que asumen para movilizarse en el territorio e interactuar con actores armados y con las dinámicas que el microtráfico impone. Pero también, a partir de la forma en que interpretan lo que sucede en su barrio.

### **Microtráfico y *outsourcing* criminal: Cambios en las formas de violencia de El Barrio**

La economía de la droga hoy conecta su producción, comercialización y finanzas en una intrincada red que hace caso omiso de las fronteras nacionales, y que se extiende a todos los continentes. El narcotráfico ejerce su poder para penetrar en las estructuras de la sociedad civil, para intervenir en las redes de toma de decisiones y para controlar parte de los territorios nacionales. Por una parte, ha generado relaciones políticas, clientelas e intermediaciones atadas al poder económico de la droga y al miedo. Por otro lado, ha recurrido a diversas formas de fuerza como la vinculación con grupos armados para desestabilizar al Estado y ganar territorios, imponiendo así sus propias leyes y valores. (Valencia, 2015).

En el caso colombiano, sobresalen las transformaciones que ha tenido el narcotráfico en los últimos años, al estrechar la relación con grupos armados ilegales que provienen de las estructuras paramilitares que se desmovilizaron en 2003. Bajo la denominación de autodefensas se desmovilizó entre 2003 y 2006 una variada gama de grupos armados, que buscó un tratamiento político por parte del Estado o justificó su existencia en razón a la amenaza de la guerrilla, para encubrir sus verdaderos intereses relacionados con negocios ilegales. Teniendo en cuenta que el nacimiento

de las bacrim se puede ubicar hacia 2005, claramente sus orígenes son el resultado de un periodo de expansión e internacionalización de las dinámicas del narcotráfico que suceden desde el 2003 hasta el 2008. Daniel Rico (2013) sostiene que esta fase de expansión de las bacrim se caracteriza por tres factores: un mejor encadenamiento productivo frente a las organizaciones mexicanas, una expansión geográfica nacional y un avance en el marco internacional.

El escenario del microtráfico ha significado entonces, aproximadamente desde 2005, la disputa del espacio por parte de diversos grupos que pretenden ampliar su dominio en los barrios, como forma de aumentar sus ingresos, lo que a su vez ha significado un cambio en la forma de actuación de las pandillas juveniles en los barrios. Como lo describe Jorge Ordóñez (2017), la progresiva influencia de las bandas criminales en los barrios de la ciudad, implicó cambios en la actuación de las pandillas; pues, como afirma el mismo autor, los jóvenes pandilleros abandonaron un tipo de violencia ritual, que implicaba fuertes vínculos identitarios con su territorio, reglas simbólicas asociadas a la amistad, la calle y el peligro, así como un código de honor que implica defender al grupo de cualquier ataque de otro grupo; pasando a una violencia instrumental, en la que los jóvenes que por su prontuario delictivo resulten más atractivos para las bandas de microtráfico, son contratados por una estructura delincencial organizada y con jerarquías. Este paso de la violencia ritual a la instrumental muestra las profundas diferencias de cómo operaban las pandillas en los años noventa, a cómo lo hacen ahora al servicio de la empresa criminal.

Frank, habitante de El Barrio, relata cómo actuaban las pandillas en la década del noventa y cómo actúan ahora:

Lo que pasa es que las pandillas de ahora no son como las de antes. Antes habían ¿cómo decirlo? como unos códigos de honor, vos tenías problema con alguno de otro lado, pero podías seguir pasando cerca y no te pasaba nada; si pasabas y tu enemigo quería pelear te decía “andáarmatepa’ que nos demos” pero no te atacaba por la espalda porque eso era mal visto, era como una traición. Ahora te van dando por la espalda sin preguntar. Desde hace diez años para acá, esto se puso feo, porque estos muchachos se mataban entre ellos y ni siquiera sabían quién era el jefe. Eso pasó porque los narcos tuvieron que empezar a vender la droga aquí en el país porque los estaban atacando. Allí la cosa se puso fea. Ahora está más calmado, pero hace unos tres años mataron por aquí, sin mentirle, unos 250 muchachos. Todos eran niños de 13, 14 o 16 años. Antes, el que iba a vender su marihuana, la

compraba afuera y la vendía en su casa y no pasaba nada. Pero ya después no se podía, aquí vendían droga dos grupos, uno de Buenaventura y otro de aquí de Cali; cada uno tenía la droga marcada, si un muchacho estaba consumiendo droga con la marca de un grupo y los del otro grupo lo pillaban, lo mataban. (Entrevista a Frank, comunicación personal, abril 15 de 2017)

Otro de los entrevistados es El Fiscal, quien a través de las labores que ejerció en el Distrito, evidencia las transformaciones de las pandillas de acuerdo con las dinámicas de la violencia en la ciudad:

Yo llegué a trabajar al Distrito en 1995 y estuve hasta 2007 y durante esa época la estructura de las pandillas cambió, porque mientras el Estado es demorado para ajustarse a las nuevas realidades, el delincuente no; la delincuencia muta y se transforma. Yo empecé a ver en el Distrito de Aguablanca el fenómeno de reclutamiento de los muchachos para cometer actos terroristas, entonces llegaban tipos con plata y contrataban muchachos que por 200 o 300 mil pesos iban a poner una bomba, hacer un atentado, quemar un bus. En el Distrito de Aguablanca, cuando el narcotráfico con las bacrim comienza a reclutar a los pelados, a las pandillas para cometer acciones de sicariato, las oficinas de cobro empiezan a constituirse en barrios aledaños al Distrito. Todas esas formas delictivas comienzan a captar “sardinitos” (adolescentes) del Distrito de Aguablanca para hacer sus acciones de sicariato. (Entrevista a Fiscal, comunicación personal, agosto 10 de 2017)

Adelmo, otro habitante del sector, afirma que a mediados de los años noventa aumentaron las muertes violentas. La causa no era la guerra entre las cuatro pandillas reconocidas en el sector, sino enemistades más personales y acciones de sicariato que intentaban acabar con personas que se dedicaban al hurto y cuya actividad era reconocida por los habitantes del barrio. Pero argumenta que las formas de violencia han cambiado: “antes los ladrones respetaban a los conocidos y todo el mundo los conocía a ellos. Ahora roban a cualquiera, hay demasiada gente y entonces ya no es fácil identificarlos”. Esto muestra la discontinuidad en la relación de los jóvenes que cometían actos delictivos en los años noventa y los que lo hacen ahora, lo que puede considerarse como un orden social en el que los habitantes no involucrados con las pandillas tenían cierto control sobre dichos jóvenes. Lo que ha significado una disminución de la agencia de los habitantes del barrio y su legitimidad para ejercer control u oponerse de manera pacífica a la delincuencia, pues en las formas de violencia anteriores los pandilleros veían restringidos sus actos por la sanción

social de sus vecinos y por el respeto que les podían llegar a tener. En la actualidad el poder es ejercido por agentes externos, un poder violento sin rostro al que es difícil y muy peligroso enfrentarse.

De esta manera, se hace evidente la forma en que se han percibido los cambios que el negocio del microtráfico generó en los jóvenes asociados a las pandillas, debido a la incorporación de una lógica tercerizada dentro de la estructura definida en la cadena productiva de economía de la droga, que significa nuevas formas de vinculación a la delincuencia y la ilegalidad. Esto puede ser definido como un modelo de *outsourcing criminal* (Valencia y Vinasco, *Forthcoming*), que como ya se ha señalado, refiere a la integración de los jóvenes que demuestran mayores capacidades para delinquir, a redes criminales que mantienen el negocio de la droga y sus actividades asociadas, a través de una estructura con jerarquías en la que dichos jóvenes representan el último –y más vulnerable– eslabón de la cadena productiva de la droga.

La nueva lógica tercerizada de la violencia y el microtráfico, sustentada en las estructuras asociadas a las bandas criminales, demuestra la capacidad del narcotráfico para transformarse, a través de la diversificación y flexibilización de su cadena productiva (Valencia, 2015). Características que le han permitido a las estructuras del narcotráfico mantener su poder e incidir en la violencia de la ciudad con mayor especialización en los últimos años. Además, la utilización de nuevos repertorios de violencia relacionados con el desarrollo de actividades ligadas al microtráfico y a la prestación de servicios, introduce nuevas dinámicas como el miedo, las amenazas, las extorsiones y los asesinatos.

A pesar de este panorama, aunque el microtráfico haya inundado la ciudad y las dinámicas de la violencia hayan aumentado, existe una focalización de la violencia. Es decir, aunque alejándose de una explicación causal que vincule pobreza con violencia, no se debe desconocer que la falta de oportunidades, las necesidades económicas y las desigualdades sociales sí son un escenario que sirve como catalizador del microtráfico y sus consecuencias violentas. Problemáticas relacionadas, a su vez, con dinámicas más globales en torno a los intereses geopolíticos de producción de drogas y rutas del narcotráfico que conectan las costas del Pacífico colombiano con Centroamérica y los países del norte (Arévalo y Guáqueta, 2014, p. 121).

Estos cambios en lo local, reflejo de las dinámicas regionales y nacionales del negocio de la droga, permiten evidenciar que, como señala Escobedo, las pandillas en Cali no



pueden concebirse por fuera del espectro criminal determinado por el narcotráfico y por la relación con estructuras asociadas a las bacrim (Escobedo, 2013, p. 5). Pero al mismo tiempo, el fenómeno del microtráfico no puede ser entendido sin comprender el escenario en el que se desarrolla, ya que, como afirma Camacho, los fenómenos sociales sólo adquieren sentido cuando se insertan en una estructura compleja que además de producirlos, los dota de significado; por ello, el significado social de la droga pasa por el análisis de la población involucrada, la economía que genera y los espacios en los que se desarrolla (Camacho, 1988).

### **¿Pacificación o nuevos repertorios de violencia?**

Estas nuevas lógicas de la violencia han creado para los habitantes de El Barrio nuevas formas de negociar con ella y de interpretarla. Son evidentes para los entrevistados las nuevas lógicas del reclutamiento de menores de edad para los negocios de la droga y el delito, que llevan a los jóvenes delincuentes a involucrarse en crímenes de mayor peso y a someter sus vidas al control de estructuras criminales a cambio de las ganancias que éstas les ofrecen, tal como lo afirma Junior:

Pues pandillas de pronto hay, pero ya no se están dedicando a lo mismo de antes, que porque esta persona mató a mi primo entonces yo lo voy a matar, o por cobrar venganza, o porque alguien está vendiendo droga y yo también voy a vender, eso ya casi no se ve. Yo creo que lo que hay ahora es una persona que debe estar al mando, y entonces les da potencial a los pelados y los pone a hacer robos mucho más grandes. Por ejemplo, yo me he dado cuenta de pelados de 15 o 16 años que ya roban motos, hacen fleteos y se vuelven asesinos a sueldo. Tiene que ser alguien que los esté liderando, alguna banda que tenga gente aquí en el barrio y afuera, porque he escuchado que roban carros y son menores de edad. Yo creo que eso ha contribuido a que el barrio cambie, aunque esa no debería ser la solución, pero los pelados ya ven el negocio mucho más grande, ya no se preocupan por robar un celular o 20 mil pesos, sino que ya quieren tener más y tener poder. Entonces como piensan es en esos negocios más grandes, pues ya no roban en el barrio, entonces hay menos problemas aquí. Igual el robo ha bajado mucho aquí en el barrio, no es que ya no roben, pero igual ya ha bajado mucho. Aunque yo creo que hay alguien más grande, que tiene mucho poder, que los controla y les dice que hacer; pero creo que esa persona también influye para que ellos no sigan robando aquí. Lo que debe querer esa persona es que haya tranquilidad en el barrio, para que la policía no esté viniendo a hacer rondas y llevarse

gente, para él poder seguir vendiendo su droga sin problema. Yo lo veo así.  
(Entrevista a Junior, comunicación personal, enero 14 de 2018)

Esto implicaría que las nuevas estructuras del crimen organizado buscan evitar la violencia para garantizar el negocio del microtráfico y evitar la incursión de las autoridades policiales, así como garantizar el suministro de jóvenes para actos delincuenciales. Esto implica el aumento del control ejercido por las bandas criminales sobre el barrio, que ha significado una paradójica disminución en los índices de delincuencia y homicidios en el sector:

Yo creo que ahora hay más expendios de droga en el barrio, pero lo que creo es que ahora, quienes los manejan, los manejan como una industria, como un verdadero negocio. Eso (la droga) ya no es de los que venden aquí, sino de quienes lo traen y les trabajan a otros. Esas son las famosas guerras o la razón de muchos muertos. Por ejemplo, ¿usted no ha notado que en este barrio hace mucho rato que no hay muertos? Lo que sucede es que cuando un grupo que expende droga entra a dominar un sector, lo primero que hacen es tratar de bajar el índice de robos, de asesinatos, porque no les conviene que la policía esté aquí metida. Entonces los expendios venden la droga, pero eso no es de ellos, es de una persona del barrio que les entrega la droga, y esa persona le responde a otra que está fuera del barrio y de allí a otra, etc. Por eso es que ya no se escuchan tantos robos como antes. (Entrevista a Adelmo, comunicación personal, enero 27 de 2018)

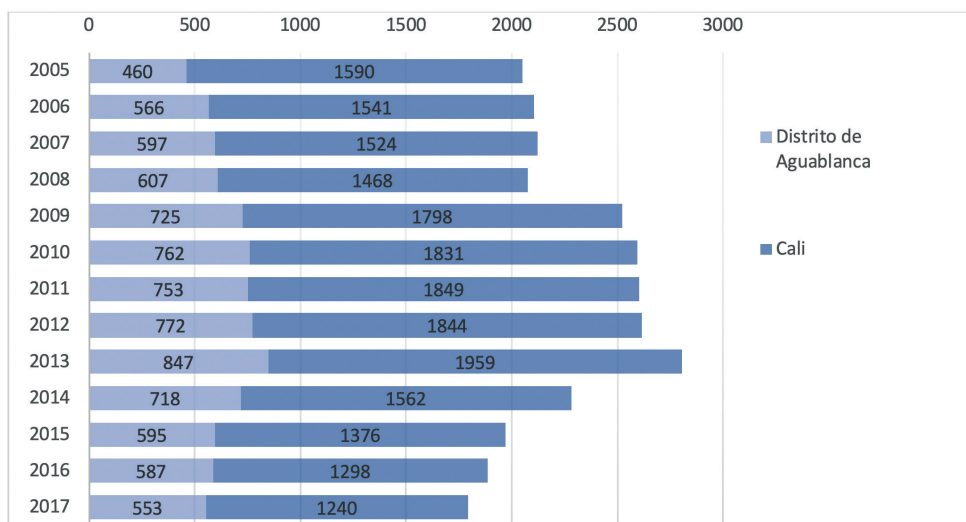
Efectivamente, las cifras de homicidios han venido disminuyendo en la ciudad y en el Distrito de Aguablanca (Ver Tabla 1). Aunque Cali continúa siendo una de las ciudades con mayor número de homicidios del país, sus tasas han venido disminuyendo en los últimos años, presentando, incluso, cifras históricas de reducción de homicidios como la de 2017 con 1240 homicidios, la más baja de los últimos 25 años. En el caso de El Barrio encontramos un fenómeno paralelo; según los informes del Observatorio Social, sus cifras de homicidios han tenido una tendencia al descenso, llegando incluso, en algunos de los últimos años, a salir de la lista de los 20 barrios con mayor número de homicidios.

Sin embargo, a pesar de coincidir en la reducción, la proporción de homicidios en el Distrito continúa siendo mucho más alta que en el resto de la ciudad. Es decir que, la mayor proporción de la violencia presente en la ciudad continúa concentrada en sectores que, como El Barrio, han sufrido las peores consecuencias de la violencia.

De allí la importancia de analizar los barrios del Distrito de Aguablanca para interpretar de manera más precisa las cifras sobre violencia, pues la cifra global de la ciudad muestra una reducción general que esconde las particularidades de las localidades y la persistencia de áreas en las que se concentran los mayores impactos de la violencia.

Lo anterior se hace evidente, además, en las interpretaciones sobre las causas de esta reducción de las cifras, pues las autoridades municipales y departamentales lo han mostrado como un triunfo de sus estrategias de seguridad y lucha contra la delincuencia, mientras en El Barrio se interpreta esta reducción como una estrategia de los grupos de microtráfico para garantizar el éxito de su negocio.

**Tabla 1.** Contribución del número de homicidios ocurridos en el Distrito de Aguablanca<sup>7</sup> a la cifra global de Cali 2005-2016.



*Fuente:* Elaboración propia con base en datos tomados del Observatorio Social de Cali.

Esta última interpretación supone entonces que la reducción de los homicidios es igual a un aumento exponencial del poder de las bandas criminales en la ciudad, un poder

<sup>7</sup>Para efectos estadísticos, el Observatorio Social de Cali divide a la ciudad por sectores. En el Sector Oriente incluye las comunas 13, 14, 15, 16 y 21 que se asume aquí como Distrito de Aguablanca.

criminal capaz de revertir la tendencia en los homicidios de una ciudad para su beneficio económico, basando su estrategia en el control del espacio, el miedo y las amenazas:

Ahora la venta de droga está organizada de otra manera porque ya no es como antes que si a usted le gustaba, estaba pelado y no tenía nada más qué hacer, se ponía a vender droga. Ahora cualquiera no puede vender, porque el negocio ya tiene dueño. El problema de que alguien domine la droga en el barrio es cuando a esa persona la matan o la coge la policía; ese parte entre la desaparición de esa persona y la aparición del siguiente que controle, es el momento en que el barrio se daña, pero, lamentablemente, la tranquilidad la dan ellos mismos. (Entrevista a Adelmo, comunicación personal, enero 27 de 2018)

Esto supone la paradoja de una relativa tranquilidad y pacificación, producto de la dominación ejercida por las bandas criminales que controlan el negocio de la droga. ¿Se podría entonces asumir que la disminución en los homicidios es un indicador de tranquilidad en el barrio y de triunfo de la seguridad en la ciudad? Y que, a pesar de las problemáticas que genera, ¿el microtráfico ha salvado la vida de muchos habitantes del distrito y de la ciudad? Todo a través de las estrategias de control del territorio para el negocio del microtráfico.

Arjona (2011) llama la atención sobre los problemas que pueda significar asumir las cifras sobre violencia como un indicador de mayor o menor presencia de actores armados en una localidad, pues dicha disminución podría deberse a que el grupo armado hace presencia en el territorio sin ejercer el tipo de violencia que registran las estadísticas, es decir, la violencia podría ser ejercida mediante formas que no son cuantificables. Otra explicación es que los grupos armados podrían utilizar estrategias para no dejar rastro de sus acciones, por ejemplo, en el caso de los asesinatos, podrían desaparecer a sus víctimas o trasladar sus cuerpos a otros lugares, con el fin de no dejar rastro de sus acciones en determinados contextos.

Respecto a la primera opción, la posibilidad de que las bandas criminales estén ejerciendo otras formas de violencia, menos visibles, podría ser posible para el caso de El Barrio, si se tiene en cuenta que la disminución en las cifras de homicidios, ha estado acompañada, como aseguran los entrevistados, de un aumento del microtráfico y el consumo de drogas, del poder de actores armados externos y de la incertidumbre que generan los reacomodamientos constantes del negocio de la droga; es decir, un aumento y reconfiguración de los repertorios de violencia que

escapa a las estadísticas. Un punto que se debe tener en cuenta es que la reducción en las cifras no representa un cambio sustancial en las realidades de la ciudad, pues ésta continúa presentando más de 1200 muertes violentas al año. En cuanto a la delincuencia, aunque los entrevistados ya citados aseguren que ha bajado, también narran historias recientes sobre cómo este flagelo continúa sucediendo a familiares, amigos y a ellos mismos; además de hablar sobre las zonas ‘calientes’ y del temor que sienten en determinados horarios o en zonas específicas del barrio.

En cuanto a la segunda posibilidad, si tenemos en cuenta la lógica que han seguido muchos de los asesinatos registrados en los últimos meses en Cali, esta última explicación podría cobrar mucho sentido, pues se han incrementado los hallazgos de personas asesinadas en las afueras de la ciudad, en zonas rurales de municipios limítrofes y en barrios de clase media y alta; la mayoría han sido relacionados por las autoridades caleñas con “ajustes de cuentas” entre bandas dedicadas al narcotráfico provenientes del Pacífico colombiano. Sin embargo, las problemáticas señaladas en el anterior párrafo evidencian que ésta no es una problemática importada, pues el microtráfico y las bandas que lo manejan, no son ajenas a la ciudad ni a sus barrios, por el contrario, han aumentado su poder y sus estrategias violentas. Por ello, la disminución en las cifras sí podría relacionarse con una estrategia de las bandas criminales para cuidar su negocio y evitar acciones de la fuerza pública, ya sea ubicando los cuerpos de sus víctimas en zonas apartadas de la ciudad o utilizando estrategias como el miedo y las amenazas, ya que en ciertos casos la amenaza del uso de la violencia les podría resultar mucho más efectiva que la violencia misma.

En cuanto a los discursos de tranquilidad de El Barrio por parte de sus habitantes, estos podrían significar no una disminución de la violencia, sino un mecanismo para esconder sus nuevas realidades. Lo que puede estar sucediendo es que las pocas garantías de seguridad que se perciben por parte del Estado terminen llevando a muchos habitantes a aceptar las actuaciones de los grupos armados, en cuanto al control de la delincuencia común mediante la delincuencia organizada, aun sabiendo que sus estrategias son mucho más perversas y letales y que significan una amenaza latente para el bienestar y la seguridad de la comunidad.

Sin embargo, que los entrevistados aseguren que El Barrio es más seguro ahora, no significa que desconozcan las realidades de la violencia, sino que las aceptan y construyen su cotidianidad con estas nuevas lógicas, llegando a naturalizar muchas de las realidades de la violencia y encontrando estrategias para habitar en este lugar, evitando la violencia:

Aquí se manejan ciertos códigos. Dependiendo de cómo haya sido la reacción de uno después de que lo hayan robado, los ladrones no toman represalias con uno si uno les guarda cierto respeto. Eso es lo que me ha pasado y lo que he visto. O si hay alguna persona que te conoce, pues esa persona puede entrar a interceder por vos. Yo lo veo así y es lo que me ha pasado, aunque ellos también deben sentir miedo. (Entrevista a Junior, comunicación personal, enero 14 de 2018)

Los habitantes de El Barrio han creado sus propias dinámicas de negociación, estilos de transitarlo y habitarlo, formas de interactuar con los actores armados, negociación con los espacios que se consideran más peligrosos, normas implícitas o explícitas sobre cómo actuar ante el peligro y estrategias de convivencia. Ello se evidencia también en la construcción de fronteras simbólicas (entre zonas problemáticas, y otras no) como estrategias para espacializar la violencia y hacerle el quite a ella y como mecanismos de negociación, también a través de los discursos y estereotipos sobre algunos habitantes del barrio. Así, cada habitante crea su propio mapa mental del peligro y con él resignifica estratégicamente el territorio. Todas estas estrategias son las que permiten afirmar que la construcción de orden social en las localidades con altos índices de violencia, no solo depende de los actores armados, pues los demás habitantes también encuentran sus propias lógicas de actuación alrededor de la violencia; lo que supone una serie de relaciones mucho más amplias y complejas que las planteadas desde una visión reduccionista de buenos-malos.

Un factor que alimenta estas nuevas formas de violencia es el aumento en el pie de fuerza policial en los barrios populares. Aumento que se relaciona con las estrategias estatales para reducir la criminalidad y el delito, y que encuentra su justificación, como ya se ha señalado, en la reducción de las cifras de violencia interpretadas como un triunfo de las políticas de seguridad.

Las interacciones entre la comunidad y actores estatales, principalmente la policía, introduce un componente de conflicto y violencia, que evidencia las relaciones complejas con las autoridades y la forma en que se tramita, por parte del Estado, las problemáticas de los sectores populares:

En estos días también tuvimos un problema grave, porque mi hijo se fue para la casa de mi hermana, pero como ella no lo dejó entrar, él le golpeó la puerta y le tiró piedras. Mi hermana me reclamó y yo tuve que llamar a la policía, y como ellos ya saben dónde vive él, vinieron hasta aquí, se metieron a mi casa y lo golpearon,

yo sentí mucho pesar y me arrepentí de haberlos llamado. Ese error no lo vuelvo a cometer, lo hice por quedar bien con mi hermana, porque ella me ayuda y me culpa por lo que mi hijo hace. Pero yo le digo que no es mi culpa. Además, los policías que ya lo conocen le dicen: “cuando usted robe, no lo haga cerca, robe lejos y comparta con nosotros” y el vicio (droga) que le quitan se lo meten (consumen) ellos mismos. Pero los vecinos no me creen, dicen que estoy mintiendo; yo sé quiénes son los policías que hacen eso, pero uno no se puede arriesgar, no puede decir nada porque lo pueden matar. (Entrevista a Gloria, comunicación personal, diciembre 18 de 2017)

La represión y los abusos de autoridad, no solo revictimizan a los habitantes de El Barrio, sino que van creando sentimientos de rechazo a las estrategias de seguridad del Estado. Este rechazo podría ser un factor que contribuya a la aceptación de los habitantes a las formas de control de la delincuencia impuestas por los actores armados externos. Ante la falta de garantías por parte de las autoridades para garantizar la seguridad en El Barrio y desdibujar su papel mediante la represión y los abusos de autoridad.

Estos tipos de relación entre las autoridades policiales y El Barrio se encuentra mediada por fenómenos más complejos, relacionados con la criminalización y discriminación hacia los habitantes del Distrito de Aguablanca y que se puede notar, no sólo en las relaciones e interacciones dentro del barrio, sino en las interacciones que sus habitantes establecen fuera de él y en los que su condición de habitantes del Distrito de Aguablanca, prevalece por encima de sus capacidades, generando formas explícitas de discriminación:

Una vez iba a entrar a trabajar a la empresa X; yo ya iba derecho porque iba recomendado, y cuando me preguntaron dónde vivía, porque iba a trabajar en una parte donde me relacionaba con modelos y personas de clase alta, se echaron para atrás, no me volvieron a llamar. A la gente del Distrito la bloqueaban. (Entrevista a Junior, comunicación personal, enero 14 de 2018)

Estas formas de discriminación hacen evidente que los habitantes de El Barrio y del Distrito, deben sumar a la violencia explícita sufrida en el barrio, otras formas de violencia (implícita o simbólica) dentro y fuera de él, ya sea por parte de las instituciones del Estado o de la sociedad en general. La estigmatización de los barrios del oriente aumenta la vulnerabilidad de los jóvenes que allí viven, pues ante las pocas oportunidades de inserción social, cultural y laboral en la ciudad, la delincuencia se presenta como una vía rápida para conseguir dinero. De allí la importancia de analizar, desde lo local, las dinámicas de la violencia en los barrios

del oriente de la ciudad, contribuyendo a visibilizar los diferentes tipos de violencia (estatal, racial, simbólica, estructural) que en interacción con la que ejercen las bandas criminales, produce espacios de mayor concentración de violencia urbana.

El predominio de los homicidios en las áreas geográficas de la ciudad donde hay la mayor concentración de los afrodescendientes nos permite hacer inferencias sobre los nexos entre raza, clase y espacio urbano en las dinámicas de la violencia urbana en Cali. El estado (sic) es actor político central en la producción de las geografías racializadas de la violencia en sus múltiples manifestaciones (Alves, 2017, 27).

Los espacios racializados de las ciudades son fundamentales para explicar la violencia, debido a que sobre ellos se producen ideas sobre el crimen y sobre la forma en que deben ser ordenados, basadas en el racismo y la represión. Trabajos como los de Vergara (2018) y Pulido (2016) argumentan que los estereotipos y prejuicios sobre ciertas zonas, a partir de discursos racistas o de clase, configuran territorios útiles al poder, pues permiten crear sobre ellos discursos que justifican la intervención, la represión, la extracción de sus recursos y el abandono estatal.

Estas ideas sobre determinadas áreas geográficas tienen que ver con el contexto en el que se han formado, pues como señala Vergara “*territories are historical formations that need to be understood with in the context in which they are conceived, produced, lived, re-produced, and unproduced.*” (p. 27)<sup>8</sup>. A través de su análisis del departamento del Chocó en Colombia, argumenta que los discursos histórico-hegemónicos creados sobre determinados territorios y personas, se construyen a partir de narrativas de subdesarrollo, marginalidad y barbarie, lo que termina convirtiéndolos en “territorios vaciados” y a sus habitantes en “cuerpos vaciados”. Este vaciamiento anula al otro desconociendo su historia, su lugar en la sociedad y sus capacidades, creando además una relación de dominación, en la que el sujeto o territorio vaciado es representado de acuerdo con lo que el dominador considera; representación que regularmente define estos espacios como pobres, racialmente negros y atrasados en términos políticos, económicos y culturales.

Pulido, por su parte, argumenta que el racismo funciona como un proceso ideológico que da forma y produce lugares racialmente devaluados. Al analizar el caso de la ciudad de Flint en Estados Unidos y la contaminación a la que fue sometida el agua

---

<sup>8</sup> “Los territorios son formaciones históricas que necesitan ser entendidos dentro del contexto en el que son concebidos, producidos, vividos, re-producidos y no producidos”. Traducción por Diana Vinasco.



que consumían sus habitantes, afirma que este lugar fue considerado por el Estado como desechable debido a la predominancia de habitantes pobres y negros. Aunque Flint no sea un lugar habitado exclusivamente por afroamericanos y los blancos también hayan sufrido las consecuencias de esta contaminación, la autora argumenta que los blancos pobres que allí residen se ven obligados a vivir en circunstancias similares a las de los residentes negros; pues los blancos que viven en un espacio con mayoría de gente negra encuentran que su blancura es de utilidad limitada para escapar de la devaluación asociada con la gente y los lugares negros pobres. No se trata pues de que los territorios marginados estén habitados exclusivamente por personas afrodescendientes, sino que este componente es el que prevalece a la hora de crear discursos, aplicar políticas públicas y ejercer control sobre estas áreas.

Para el caso del Distrito de Aguablanca, este puede ser considerado también un territorio vaciado, pues su lugar en la historia y en el desarrollo de la ciudad de Cali ha sido anulado, convirtiéndolo en un lugar devaluado, lo cual justifica la represión policial y el abandono por parte del Estado. Asimismo, ha sido representado por las instituciones y la sociedad caleña a partir de discursos de pobreza, desplazamiento, racismo y violencia, debido a la alta concentración de afrodescendientes –provenientes principalmente de la costa pacífica por causa del conflicto armado–, que habitan este espacio, pues tal como lo demuestra Barbary (2004) en su investigación: “A nivel global en la ciudad de Cali, el proceso de concentración residencial de las poblaciones parece seguir una jerarquía racial estricta asociando sistemáticamente los contextos urbanos más pobres a mayor oscuridad en el tono de piel de la población” (p. 182).

Al ser estigmatizados los barrios del Distrito, sus habitantes son excluidos de las oportunidades que ofrece la ciudad. Asimismo, estos espacios terminan representando una utilidad, pues se les atribuyen los problemas urbanos de la ciudad, librando al Estado de su papel como agente reproductor de violencia socio-espacial. Este discurso ya era evidente desde la formulación de los primeros planes de desarrollo de la ciudad, que adoptaron la idea de *dos ciudades separadas por una autopista* afirmando que las problemáticas de la ciudad se concentraban en el oriente de la ciudad y, por ello, la solución consistía en intervenir estas áreas, institucionalizando con ello un lenguaje racista y criminalizador sobre el Distrito de Aguablanca, a través de una división tajante ciudad legal-ciudad ilegal<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> El primer plan formulado fue el Plan General de Desarrollo de Cali (1969) y le siguió el Plan Integral de Desarrollo de Cali (1980).

Mantener un espacio como el distrito representa amplias ventajas económicas y políticas para la ciudad, pues además de servir como escenario para la implantación de políticas represivas y policiales que permitan mostrar éxito en contra del crimen; el distrito es un proveedor de mano de obra barata para la ciudad, trabajadores que muchas veces terminan aceptando condiciones laborales precarias, ante el riesgo de no conseguir otras opciones de empleo por la discriminación laboral que supone vivir en el distrito.

A esto se debe añadir el discurso sobre las drogas cuya criminalización termina golpeando en mayor medida a los barrios populares, a pesar de que, como lo demuestran algunos estudios, el mayor consumo de droga se ubica en barrios de estrato medio y alto. El distrito termina siendo un proveedor de drogas para la ciudad y recibiendo a cambio sus consecuencias de violencia, degradación juvenil y pobreza. Esta conexión entre el distrito y el resto de la ciudad, a través de la comercialización de drogas, es una más de las cuestiones que pone en evidencia la forma en que el resto de la ciudad estigmatiza a los barrios populares, pero, a su vez, participa en la reproducción de sus problemáticas, aunque negando su evidente responsabilidad.

Como espacio que concentra el mayor porcentaje de afrodescendientes de la ciudad, y los índices más altos de pobreza, el distrito termina constituido en un espacio segregado y estigmatizado, cuyos habitantes son señalados como potenciales delincuentes y, en consecuencia, excluidos de la ciudad. Estas condiciones son aprovechadas por las bandas criminales, pues tienen claro que la pobreza y la falta de oportunidades terminan siendo un escenario propicio para el reclutamiento de jóvenes que han carecido de garantías sociales, económicas y culturales. Con estas afirmaciones no se asume que la racialización del Distrito sea sólo una cuestión del color de piel de sus habitantes, pues no todos son afrodescendientes, lo que significa es que la alta concentración de afrodescendientes en estos barrios sí les impone a sus habitantes un discurso racializado que contribuye al mantenimiento de la violencia estructural presente en el Distrito de Aguablanca.

Esta concentración geográfica de la violencia y su relación con dinámicas raciales y de clase, se hace evidente, como señalan Urrea y otros (2015), en los índices de mortalidad que, analizados por edad, sexo, lugar de residencia, etnia y causa del deceso, muestran a Cali como una ciudad peligrosa para la sobrevivencia de adolescentes y jóvenes debido a la violencia homicida; dicha peligrosidad aumenta si se es habitante del Distrito, y aún más si se es afrodescendiente. Esto indica que

los habitantes de la ciudad de Cali aumentan o disminuyen su riesgo de ser víctimas de violencia homicida a medida que acumulan, o no, los factores de juventud, lugar de residencia y pertenencia étnica.

Por ello, es posible proponer que la concentración geográfica de la violencia a partir de dinámicas raciales y de clase, analizada por Urrea a partir de los índices de mortalidad, podría aplicar también para el reclutamiento de jóvenes por parte de bandas criminales. Es decir que, en Cali, el riesgo de ser reclutado para la criminalidad a través de las lógicas de tercerización de la violencia, también podría aumentar o disminuir a medida que se acumulen los factores de juventud, lugar de residencia y pertenencia étnica. Las realidades descritas por los entrevistados sobre el reclutamiento de jóvenes a edades cada vez más tempranas, en un barrio con las características socioeconómicas y étnicas ya descritas, sugieren que sí.

## CONCLUSIONES

Este artículo ha pretendido explorar las implicaciones de la reconfiguración de la violencia en Cali “desde abajo”, teniendo en cuenta las voces de los habitantes de un barrio marginado de Cali. Mostrando de qué manera los cambios regionales y nacionales del narcotráfico y de actores armados ilegales como las bandas criminales, reconfiguran el orden social de las localidades, transformando la vida cotidiana de sus habitantes y las relaciones sociales.

Se puede concluir que la reconfiguración del orden social en El Barrio, se hace evidente a partir de los reacomodamientos en las estructuras criminales regionales, que conllevan la entrada de nuevos actores a las localidades, disputándose el negocio del microtráfico y transformando las lógicas de las pandillas. Estas últimas han pasado de grupos de jóvenes enfrentados entre sí por el territorio y dedicados a la delincuencia común, a ser reclutados por bandas criminales externas al barrio, para realizar actividades de microtráfico, sicariato y extorsiones, mediante una lógica de tercerización de la violencia u *outsourcing* criminal, que demuestra la capacidad de las estructuras del narcotráfico para transformarse y diversificarse, lo que les ha permitido mantener su poder en la ciudad.

Asimismo, los grupos de microtráfico controlan la venta de droga en el barrio y las actividades criminales que se le asocian. Dicho control reconfigura los repertorios

de violencia, pues, aunque las cifras evidencian una disminución de los homicidios en el barrio y los entrevistados aseguran que los homicidios y delincuencia común han disminuido, esto obedece a una lógica perversa que aumenta otras formas de victimización como la venta y consumo de droga, el poder criminal de actores externos en el barrio y la incertidumbre y temor que generan los continuos reacomodamientos del negocio del microtráfico. A esto se añade la victimización a la que están sometidos los jóvenes, la mayoría menores de edad, contratados por estas estructuras, induciéndolos al delito y la drogadicción, aprovechando su condición de vulnerabilidad socioeconómica.

La disminución en las cifras de homicidios que ha llevado a sugerir una pacificación del barrio y una disminución de la violencia se podría explicar por la adopción de formas de violencia que no son cuantificables, como las amenazas, las extorsiones y el miedo. También podría relacionarse con estrategias de las bandas criminales, que en la última época han ubicado los cuerpos de sus víctimas a las afuera de la ciudad. El discurso de tranquilidad de algunos habitantes podría entonces relacionarse, no con la reducción real de la violencia, sino con la adopción de nuevos repertorios de violencia y que, ante la ausencia de garantías estatales de seguridad, termina justificando formas perversas de disminuir la delincuencia común.

Los habitantes de El Barrio le han otorgado un nuevo sentido a la violencia y por ello sus prácticas se centran más en la protección de sus vidas que en la confrontación a la violencia, lo que denota una disminución de la agencia, evidente en épocas pasadas, basada en dimensiones afectivas y comunitarias, pero que está siendo destruida por las dinámicas macro y externas de la violencia que ahora dominan El Barrio. Una variación del orden social local, a partir de las dinámicas regionales del narcotráfico.

Esta forma de pacificación impuesta por los actores armados y aceptada por los habitantes de El Barrio, como la única estrategia capaz de reducir la delincuencia, sería entonces la nueva forma de orden social que se impone, como acuerdo intersubjetivo que permite regular la vida cotidiana en medio de la violencia. La forma de negociación de los habitantes con los actores armados es la aceptación de estos nuevos repertorios y las estrategias para transitar El Barrio y establecer relaciones sociales con mayor precaución, debido a la dificultad de reconocer quién se encuentra reclutado por una estructura criminal externa al barrio, pero conserva una fachada de legalidad ante sus vecinos.

Esto sugiere que entre los retos del postconflicto está la urgencia de entender las nuevas lógicas de los grupos armados, pues el ‘nuevo’ actor de la violencia en las ciudades es la estructura organizada del microtráfico, su capacidad de diversificación y su composición jerárquica, así como su lógica de *outsourcing* criminal, factores que hacen cada vez más difícil su desarticulación por parte de las autoridades estatales. Esto implicaría incluir a los jóvenes pandilleros y a los actores locales como sujetos legítimos, que también deben ser escuchados, pues como el último eslabón en la cadena del microtráfico y la violencia, son el insumo más importante para las bandas criminales a la hora de mantener su dominio en las ciudades.

Por último, es necesario tener en cuenta que uno de los principales factores reproductores de estas lógicas de violencia y criminalidad, es la desigualdad social que atraviesa Cali, pues las condiciones de vulnerabilidad social y falta de oportunidades son un escenario propicio para el reclutamiento de jóvenes por parte de estas estructuras criminales. A ello se añade la necesidad de analizar la violencia en Cali desde un enfoque de racialización, pues como ciudad que concentra el mayor número de afrodescendientes del país, sus dinámicas y problemáticas han estado atravesadas por factores raciales como reproductores de exclusión, violencia estructural y segregación urbana.

Las condiciones estructurales de pobreza, racismo y clasismo a las que ha sido sometida la población del Distrito de Aguablanca, se han convertido en una oportunidad de las bandas criminales para sus objetivos de vinculación de jóvenes y adolescentes a sus estructuras. Por ello, es necesario avanzar en el análisis interseccional de la violencia en Cali, pues se hace evidente que la relación entre los factores de raza, clase y espacio urbano incrementa la vulnerabilidad de los habitantes de Cali y los fenómenos de violencia.

## Referencias bibliográficas

- Alves, J., Moreno, V. y Ramos, B. (2014). Notas preliminares para un análisis interseccional de la violencia en el Distrito de Aguablanca (Cali-Colombia). *Documentos de trabajo del CIES*, N° 5. Cali: Universidad Icesi.
- Alves, J. (2017). “Gubernamentalidad Espacial y Agencia Criminal Negra en Cali y São Paulo: Aproximaciones para una Antropología Fuera de la Ley”. En: J. Giraldo (Coord). *Territorios y sociabilidades violentas*. Medellín: Eafit, 15-70.
- Arévalo, L. y Guáqueta, M. (2014). La seguridad en Cali: entre políticas municipales y la degradación del conflicto armado. En: *Violencia urbana: Radiografía de una región*. Bogotá: Editorial Aguilar-Fundación Friedrich Egbert Stiftung.
- Arjona, A. (2008). Grupos armados, comunidades y órdenes locales: interacciones complejas. En: F. González (Ed). *Hacia la reconstrucción del país: desarrollo, política y territorio en regiones afectadas por el conflicto armado*. Odecofi-Colciencias-Cinep: Bogotá.
- Arjona, A. (2011). Presencia vs. violencia: problemas de medición de la presencia de actores armados en Colombia. En: *Foco económico*. Recuperado de <http://focoeconomico.org/2011/12/20/presencia-vs-violencia-problemas-de-medicion-de-la-presencia-de-actores-armados-en-colombia/>
- Arjona, A. (2016). *Rebelocracy: Social Order in the Colombian Civil War*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ávila, A. (2016). *Las ciudades del posconflicto*. Fundación Paz y Reconciliación. Recuperado de <http://www.pares.com.co/columnistas/las-ciudades-del-posconflicto/>
- Bobeá, L. (2017). Ganando terreno: orígenes y fundamentos de los ecosistemas transgresores en San Juan, Puerto Rico. En: *Territorios y sociabilidades violentas*. Medellín: EAFIT.
- Camacho, A. (1988). *Droga y sociedad en Colombia: el poder y el estigma*. Cali: Universidad del Valle-CIDSE.
- Camacho, A. y Guzmán, A. (1990). *Colombia, ciudad y violencia*. Bogotá: Ediciones Foro Nacional.
- Escobedo, R. (2013). Violencia Homicida en Cali: focos y organizaciones criminales. Una mirada a largo plazo. *Serie Informe*, 21. Bogotá: Fundación Ideas para la Paz.
- García, C. (2011). Los estudios sobre órdenes locales. Enfoques, debates y desafíos. *Análisis Político*, 24 (73), 55-78.

- García, C. Guzmán, A. Aramburo, C. Rodríguez, A. y Domínguez, J. (2014a). Órdenes locales y conflicto armado: Una metodología comparada. *Revista Análisis Político*, (81), 3-18.
- García, C., Guzmán, A., Aramburo, C., Rodríguez, A. y Domínguez, J. (2014b). Orden social y conflicto: resultados de una metodología comparada en nueve localidades de Colombia. *Revista Sociedad y Economía*, (27).
- Guzmán Barney, A. (1993). Diagnóstico sobre la violencia homicida en Cali. *Documento de trabajo CIDSE*. Cali: Universidad del Valle/ Facultad de Ciencias sociales y económicas.
- Observatorio de Drogas de Colombia. (2016). *Microtráfico y comercialización de sustancias psicoactivas en pequeñas cantidades en contextos urbanos: Guía metodológica*. Bogotá: Ministerio de Justicia.
- Ordóñez, J. (2017). De la pandilla a la banda. Transformaciones de la violencia pandillera en barrios marginales en Cali. *Sociedad y Economía*, (32), 107-126.
- Patiño, C. (24 de noviembre de 2013). *Las ciudades en el posconflicto*. Recuperado de <https://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/7207-las%20ciudades-en-el-posconflicto.html>
- Pérgolis, J. y Ramírez-Cely, C. (2015). Las ciudades después del conflicto. La ciudad del arraigo. *Bitácora Urbano Territorial*, 25 (1), 137-142.
- Pulido, L. (2016). Flint, Environmental Racism, and Racial Capitalism. *Capitalism Nature Socialism*, 27 (3), 1-16.
- Salazar, B. (2015). Cali: Narcotráfico, poder y violencia. *Documento de trabajo CIDSE*, 163, Cali: Universidad del Valle.
- Urrea, F., Bergonzoli, G., Carabalí, B. y Muñoz, V. (2015). *Patrones de mortalidad comparativos entre la población afrodescendiente y la blanca-mestiza para Cali y el Valle*. CS, (16), 131-167.
- Valencia, I.H. (2015). Multiculturalismo y seguridad fronteriza en el archipiélago de San Andrés y Providencia. *Análisis-Fescol*, 6.
- Valencia, I. y Vinasco, D. (s.f). Orden social y microtráfico en Cali, Colombia: entre el *outsourcing* criminal y la negociación con la violencia. Cide-Conacyt, Convocatoria: ¿Qué cuentan los actores de la violencia organizada en América Latina?
- Vergara, A. (2018). *Afrodescendant resistance to deracination in Colombia: Massacre at Bellavista-Bojayá-Chocó*. Cham, Switzerland: Palgrave-Macmillan.